

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

Lima, once de junio  
del año dos mil diez.-

**LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA;** vista la causa número dos mil novecientos setenta - dos mil nueve, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, se emite la siguiente sentencia; **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata en el presente caso del recurso de casación interpuesto por Manuel Alejandro Minaya Paucar, contra la sentencia de vista de folios trescientos cincuenta y cuatro, contenida en la resolución número treinta y uno, de fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que confirma la sentencia apelada de folios doscientos cincuenta y siete, de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil siete, que declara improcedente la demanda; en los seguidos por Manuel Alejandro Minaya Paucar contra la Municipalidad Provincial de Huaraz sobre caducidad del derecho de expropiación; **FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:** Mediante resolución de folios treinta y tres del cuadernillo de casación, su fecha diecinueve de octubre del año dos mil nueve, se ha declarado **procedente** el recurso de casación propuesto por la causal de **infracción normativa procesal**, al haber cumplido con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, denunciando: **a.-** La recurrida infringe el artículo 519 del Código Procesal Civil, pues el artículo 29 de la Constitución Política del Estado del año mil novecientos treinta y tres, vigente a la fecha en que se produjo la expropiación, estableció un único trámite de la expropiación del derecho de propiedad de particulares y que fue reglamentado por la Ley número 9125 y el Decreto Ley número 17803, razón por la cual no se encuentra establecido ni regulado en ninguna normatividad ni en los citados dispositivos el trámite no ordinario de la expropiación a que alude la Sala Civil Superior; razón por la cual le es

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

aplicable a la pretensión demandada lo previsto en la citada norma procesal;

**b.-** La impugnada infringe el artículo 1 de la Ley número 27584, pues una de las pretensiones derivadas o conexas con la expropiación prevista en el artículo 519 del Código Procesal Civil, es la referida a la caducidad de la expropiación regulada en el artículo 531 del acotado Código, y por lo tanto, la acción de caducidad se encuentra regulada por las disposiciones del citado ordenamiento procesal, por cuanto el acotado artículo 531 del mismo cuerpo legal, no exige como requisito de procedencia de dicha acción el agotamiento de la vía administrativa previa, ni su cuestionamiento posterior en la vía contenciosa administrativa, siendo el proceso de caducidad un proceso autónomo; **CONSIDERANDO: Primero.-** El derecho a un debido proceso ha sido ampliamente determinado a través de abundante jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional como la recaída en el Expediente número 4341-2007-HC/TC de fecha cinco de octubre del año dos mil siete, la cual en su noveno fundamento, ha establecido que: “(...) *Situación diferente son los casos en los que se pone de manifiesto una insuficiencia en la motivación de las resoluciones judiciales. En este tipo de casos la resolución lidia con lo arbitrario, es decir, casos en los que es imposible apreciar el nexo lógico entre la decisión adoptada y la argumentación que le sirve de fundamento (principio de congruencia de las resoluciones judiciales)*”; respecto a este tema el Tribunal Constitucional en el Expediente número 1230-2002-PHC/TC ha establecido que: “(...) *uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones (...) ello garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución*”. A partir de lo expuesto en el presente fundamento se realizará el análisis a fin de determinar si la resolución ha atentado el principio de tutela jurisdiccional efectiva;

**Segundo.-** Examinado el presente proceso para determinar si se ha

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

infringido las normas procesales en los términos denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones: **I.-** El demandante Manuel Alejandro Minaya Paucar, postula la presente demanda siendo los fundamentos de hecho de la pretensión, referidos a que se declare la caducidad del derecho de expropiación otorgado mediante Decreto Supremo número 032-CRYRZA-72 a favor de la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la zona afectada por el terremoto de fecha de treinta y uno de mayo del año mil novecientos setenta, y transferido posteriormente a favor de la Municipalidad Provincial de Huaraz sobre el bien de su propiedad, anteriormente ubicado en el catastro M - uno A - cinco, posteriormente denominado Lote de terreno número cinco, Manzana uno, Urbanización Villón Bajo, actualmente Avenida Prolongación Mariscal Luzuriaga número novecientos cuarenta y dos, Belén; a efectos de determinar que la demandada no es propietaria a título de expropiación del bien sub *litis* por no haber iniciado el proceso judicial de expropiación dentro del término que establece la Ley, por no haber efectuado el pago del justiprecio, habiendo caducado su derecho de expropiación; **II.-** Tramitado el presente proceso por los cauces que a su naturaleza corresponde, el Primer Juzgado Mixto de Huaraz, por resolución de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil siete obrante a folios doscientos cincuenta y siete, declaró improcedente la demanda, concluyendo entre otros aspectos: *“(...) En relación a la caducidad que como argumento de defensa refiere la entidad demandada, no es aplicable lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, por cuanto el accionante habría tomado conocimiento del Decreto Supremo número 032-CRYRZA-72 de fecha veintidós de mayo del año mil novecientos setenta y dos, al expedirse la Resolución Administrativa que en dicha época no impugnó menos aún cuestionó sobre la referida expropiación, ni se opuso a las acciones de saneamiento técnico, legal y administrativo que asumió la entidad edilicia emplazada, no siendo procedente declarar la caducidad, por lo que se considera que la acción judicial entablada resultaba improcedente debido a que en la instancia*

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

*administrativa el ahora demandante solicitó la caducidad de la expropiación con resultado negativo y no cuestionó en proceso contencioso administrativo, careciendo de objeto emitir análisis alguno en relación al segundo, tercer y cuarto punto controvertido referidos al justiprecio y utilización del bien, la concesión de propiedad de la demanda y si el inmueble se encuentra dentro del plan de desarrollo urbano (...);* **III.-** La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en consecuente acto procesal emitió resolución, confirmando la resolución apelada, que declara la improcedencia de la demanda, mediante resolución de folios trescientos cincuenta y cuatro; **Tercero.-** Respecto al principio de tutela jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional ha precisado en el Expediente número 763-2005-PA/TC-LIMA, de fecha trece de abril del año dos mil cinco, en el cual se sostiene lo siguiente: “(...) Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia (...) cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

*en torno a su procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna. La tutela judicial efectiva no significa, pues, la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que, admitida a trámite, tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda. Cabe también puntualizar que, para la admisión a trámite, el juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la relación procesal que, como sabemos, se asientan en los presupuestos procesales y en las condiciones de la acción; es decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila voluntad de la ley-caso justiciable). Se trata del ejercicio del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba. Es en la sentencia donde el juez declara (dice) el derecho y no liminarmente; por ello, puede haber proceso con demanda desestimada en el fondo. Y es que, como lo expresa Peyrano, cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa con cualquier dosis de razón”; **Cuarto.-** En ese sentido, respecto a los agravios en los términos denunciados por el demandante, se advierte de autos que el *Ad quem* en su quinto y sétimo considerando,*

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

refiere que: “(...) aparece de fojas cincuenta y cinco la solicitud presentada por el actor al Gobierno Provincial de Huaraz, en el que pide la declaración administrativa de caducidad del derecho de expropiación del bien inmueble de éste, y en el que recayó la Resolución de Gerencia número 261-2005-GPH-GDUR que declara improcedente esta petición administrativa; estos actos administrativos no fueron impugnados en la vía jurisdiccional como correspondía a la naturaleza de los actos, recurriéndose esta vez ante el Poder Judicial, solicitando peticiones similares recurridas a la vía administrativa que no fueron contradichas oportunamente (...) Los argumentos referidos precedentemente permiten establecer que el derecho que invoca el apelante de señalar que el artículo referido al trámite de la pretensión en la vía abreviada a que se refiere el artículo 519 del Código Procesal Civil, no le es aplicable al derecho postulatorio, pues no se trata de un trámite de expropiación como se ha dicho ordinariamente emanado de una norma de rango mayor sino que han habido pretensiones administrativas previas que han concluido en sendas resoluciones administrativas que no fueron atendidas por el órgano pertinente(...)”; al respecto se observa de autos que las instancias inferiores vulneran el principio de tutela jurisdiccional efectiva, desde que no han tenido en consideración que los argumentos de la actora para solicitar la demanda de caducidad de derecho de expropiación del inmueble que alegan es de su propiedad, se amparó en lo dispuesto por el artículo 531 del Código Procesal Civil que prevé la caducidad del derecho de expropiación, materia de demanda; **Quinto.-** La expropiación se encuentra regulada en el subcapítulo cuatro del Capítulo II de las Disposiciones Generales del Código Procesal Civil, que se tramita en la vía de proceso abreviado. Así el *artículo 519*<sup>1</sup> del citado cuerpo legal, establece que todas las pretensiones derivadas o conexas sobre la expropiación se tramitan con arreglo a lo dispuesto en este subcapítulo; y el *artículo 531*<sup>2</sup> del precitado Código Procesal establece

<sup>1</sup> **Artículo 519.-** Competencia por materia.-

Todas las pretensiones derivadas o conexas con la expropiación se tramitan con arreglo a lo dispuesto en este subcapítulo.

<sup>2</sup> **Artículo 531.-** Caducidad

El derecho de expropiación de cualquier sujeto activo caduca en los siguientes casos:

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 2970-2009**  
**ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

las normas procesales respecto a la petición sobre la caducidad del derecho de expropiación; dentro de ese contexto, se aprecia de la demanda que el actor postuló como pretensión se declare la caducidad de derecho de expropiación otorgada a favor de la demandada, respecto al lote de propiedad del recurrente número cinco, Manzana uno de la Urbanización Villón Bajo, actualmente Avenida Prolongación Mariscal Luzuriaga número novecientos cuarenta y dos, Belén; por tanto, existiendo normas expresas que regulan el proceso sobre expropiación, y de las pretensiones derivadas y conexas a dicha pretensión; de conformidad con lo establecido por el principio de vinculación y formalidad contenido en el *artículo IX*<sup>3</sup> del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se vulnera el derecho de tutela jurisdiccional que tiene todo justiciable; **Sexto.-** Por tanto el pedido anulatorio de las resoluciones expedidas por las instancias en grado inferior, materia del presente recurso de casación merece ser amparada por la infracción normativa procesal denunciada al haberse vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva del actor; en consecuencia, el presente recurso debe declararse fundado. Por tales consideraciones declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por Manuel Alejandro Minaya Paucar mediante escrito obrante a folios trescientos noventa y dos; **CASARON** la resolución impugnada; en consecuencia; **NULA** la sentencia de vista de folios trescientos cincuenta y cuatro, contenida en la Resolución número treinta y uno, de fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash; **INSUBSISTENTE** la apelada de folios doscientos cincuenta y siete, su fecha veintiocho de setiembre del año dos mil siete, **ORDENARON** que el *A quo* expida nueva

---

Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio dentro del plazo de seis meses contados a partir de la publicación o notificación de la norma declaratoria ejecutora de la expropiación.

Cuando no se hubiera terminado el procedimiento judicial de expropiación dentro de los cinco años contados desde la publicación o notificación de la resolución suprema correspondiente.

La caducidad se produce de pleno derecho. El Juez de la causa la declara a petición de parte no pudiendo disponer nuevamente la expropiación del mismo bien por la misma causa, sino después de cinco años de dicho vencimiento.

<sup>3</sup> **Artículo IX.-** Principios de Vinculación y de Formalidad.-

Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este Código son imperativas.

Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada.

***CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
SALA CIVIL TRANSITORIA***

**CASACIÓN 2970-2009  
ANCASH**

**Caducidad del Derecho de Expropiación**

resolución pronunciándose sobre el fondo del asunto controvertido;  
**DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial  
“El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Manuel Alejandro  
Minaya Paucar contra la Municipalidad Provincial de Huaraz sobre  
Caducidad del Derecho de Expropiación; y los devolvieron. Ponente Señora  
Aranda Rodríguez, Juez Supremo.-

**S.S.**

**TICONA POSTIGO**

**PALOMINO GARCÍA**

**MIRANDA MOLINA**

**SALAS VILLALOBOS**

**ARANDA RODRÍGUEZ**

Rcd